

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO NOVENO DE FAMILIA BOGOTÁ D.C. EN ORALIDAD
Bogotá D.C, Treinta (30) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: **Acción de tutela**
Radicación: **2023-00014**

I. ASUNTO:

Dentro de la oportunidad prevista en el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, procede el Juzgado a resolver la acción de tutela instaurada por **JOSE MANUEL VILLARREAL LEAL** en contra de **FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**.

II. ANTECEDENTES:

El accionante sustenta sus pretensiones en los hechos que se resumen a continuación:

2.1. HECHOS (SÍNTESIS):

2.1.1.- Señaló que, Prestó sus servicios personales a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia mediante varios contratos de trabajo escritos suscritos entre mayo de 1975 y diciembre de 1982.

2.1.2.- Relató que, Dichos contratos de trabajo fueron suscritos por el entonces representante legal de la Federación doctor JORGE CARDENAS GUTIERREZ.

2.1.3.- Indicó que, se suscribieron los siguientes contratos:

“El primero distinguido con el No. 023 el 2 de mayo de 1975 con una duración de seis meses para laborar en Noruega y Dinamarca en demostraciones sobre el uso del café de Colombia con una remuneración de dos mil dólares estadounidenses US \$ 2.000 mensuales. 4. El segundo contrato de trabajo distinguido con el número 102 tuvo una duración de once (11) meses y veintidós días (22) comprendidos entre el 8 de noviembre de 1976 y el 30 de octubre de 1977 con una remuneración de mil ochocientos dólares estadounidenses (US \$ 1.8000) mensuales. 5. El tercer contrato de trabajo distinguido con el número 147 tuvo una duración de doce (12) meses comprendidos entre el 31 de octubre de 1977 y el 31 de octubre de 1978 con un salario de dos mil dólares (US \$ 2.000) mensuales. 6. El cuarto contrato de trabajo distinguido con el número 298 se firmó el 18 de diciembre de 1979 con un término de duración de un año contado a partir del primero de enero de 1980 y el 31 de diciembre del mismo año pudiendo prorrogarse por mutuo acuerdo. La remuneración pactada se estableció en dos mil cuatrocientos dólares estadounidenses (US \$ 2.400) mensuales. 7. El contrato número 298 fue prorrogado en dos oportunidades: la primera comprendida entre el primero de diciembre de 1.981 y el 31 de diciembre del mismo año y la segunda también por un año comprendido entre el primero de enero de 1.982 y el 31 de diciembre del mismo año con una remuneración de dos mil novecientos setenta dólares estadounidenses (US \$ 2.970) mensuales.”

2.1.4.- Que, El objeto de los contratos de trabajo firmados con la FEDERACION NAL. DE CAFETEROS consistió en prestar servicios personales subordinados mediante demostraciones sobre el uso del café de Colombia en Dinamarca y Noruega para hacer las veces del carácter símbolo de JUAN VALDES, en eventos sociales de diverso orden.

2.1.5.- Manifestó que, La FEDERACION suscribió los contratos de trabajo detallados anteriormente y no lo afilió al sistema de seguridad social, en su oportunidad lo era ISS, como era su obligación y que a la fecha tiene 88 años de edad.

2.1.6.- Que, Antes de presentar la presente acción de TUTELA, con fecha 14 de septiembre de 2022 radicó en la FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA una primera reclamación y posteriormente otra el 24 de octubre de 2022.

2.1.7.- por último, señala que con fecha 31 de octubre de 2022 la Federación le respondió mediante una constancia que revisados sus archivos no encuentra su registro de contrato de trabajo ni hoja de vida y por tanto le da a la reclamación el calificativo y contrato de prestación de servicios, con violación de los artículos 22, 23 subrogado por el art 1º. De la Ley 50 de 1990 y 24 subrogado por el art. 2º. De la Ley 50 de 1990 todos del C. Sustantivo. del Trabajo.

2.2. PETICIÓN:

Solicita se reconozca y ordene el amparo a los siguientes derechos fundamentales contenidos en la Carta Política:

La seguridad social. Art. 48 A la libertad e igualdad. Art. 13 Al libre desarrollo de la personalidad. Art. 16 Al debido proceso. Art. 29 A la protección de personas de la tercera edad. Art. 46 A la salud art. 49 todos conexos con el derecho a la vida.

Y por consiguiente ordenar:

El pago inmediato del BONO PENSIONAL a través de la entidad denominada COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

III. ACTUACIÓN PROCESAL:

La acción fue admitida por este estrado judicial el 16 de enero de 2023, ordenándose realizar las respectivas notificaciones y solicitando contestar el libelo dentro del término de dos (2) días, además, se ordenó vincular como parte pasiva de la presente acción al FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS COLFONDOS S.A.

3.1. RESPUESTA:

FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS COLFONDOS S.A. (archivo digital 009): Indico en su respuesta que las pretensiones de la accionante están encaminadas meramente a que se dirima un conflicto presentado entre la accionante y su empleador.

“El accionante José Manuel Villarreal Leal identificado con C.C. 130020; no ha estado afiliado a esta administradora de pensiones según el reporte de consulta SIAFP.

Colfondos S.A., ha procedido en derecho y en legalidad frente a la accionante, desconociendo su situación pensional.

A la fecha la accionante, no ha presentado petición formal ante esta sociedad administradora, razón por la cual no se encuentra ningún trámite pendiente con el mismo."

Así las cosas, en el presente caso, no existe fundamento jurídico ni elementos de juicio que permitan establecer que Colfondos S.A., hubiere vulnerado los derechos fundamentales deprecados por la accionante, por lo que no es posible endilgarle responsabilidad y carga alguna a esta entidad, sin que, por esa sola razón, se estén vulnerando sus derechos fundamentales.

Solicita se declare la improcedencia de la acción de tutela en lo que respecta a COLFONDOS S.A., como quiera que no exista obligación pendiente con la accionante, ya que se desconocen las condiciones laborales pactadas.

FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (archivo digital 010): indica que Lo que se pretende mediante el trámite del presente Proceso Constitucional de Tutela, no es otra cosa que, el pago de un derecho inexistente, que no ha sido objeto de declaración judicial por la jurisdicción competente y respecto del cual, no existe certeza alguna, ahora y aun a modo de discusión, en lo que concierne al pago de un título pensional en razón a unos supuestos periodos laborados en el exterior, es de relatar que, existen discrepancias en la jurisdicción ordinaria laboral y constitucional, respecto a la procedencia del derecho al pago de dichos tiempos para los cuales no existía la posibilidad material o jurídica de afiliación, menos aún, tal obligación.

Afirma la entidad que la presente solicitud de amparo resulta totalmente improcedente, pues además de ser irrelevante desde el punto de vista constitucional, tiene como problemas jurídicos esenciales, establecer la existencia de una supuesta relación laboral, sus supuestos extremos, los supuestos ingresos base de cotización, la existencia de la obligación de efectuar cotizaciones a trabajadores que laboraron en el exterior y determinar la procedencia o improcedencia del pago de un título pensional en favor del tutelante, todos estos asuntos que son de competencia de la Jurisdicción Ordinaria Laboral, y que conforme al dicho del tutelante, no es dable afirmar en el presente proceso que nos encontremos ante una situación de perjuicio irremediable.

Asegura que deviene en menester rememorar el carácter excepcional y subsidiario de la misma, el cual ha sido otorgado con el ánimo de evitar que este instrumento constitucional sea utilizado para eludir los tramites propios de la jurisdicción ordinaria, como una instancia judicial adicional o como un medio para revivir términos vencidos; máxime cuando la legislación aplicable ha dispuesto herramientas de defensa y procedimientos idóneos para elevar solicitudes como las aquí debatidas.

Que conforme al material aportado al plenario, se observa que el accionante no hizo uso de los mecanismos que le otorga el ordenamiento jurídico colombiano para mostrar su inconformidad respecto de esa decisión.

Solicita negar el amparo por inexistencia de vulneración de los Derechos invocados.

La accionada presenta un pronunciamiento de los hechos de la siguiente manera:

"PRONUNCIAMIENTO ACCIONADA

El derecho a la pensión no depende de una supuesta obligación en cabeza de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

Aunado a lo hasta aquí expuesto, no puede pasarse por alto que la obligación de cotizar siempre ha estado a cargo tanto del empleador

como del empleado; por consiguiente, no podría imponerse a mi poderdante, la asunción de las cotizaciones que tendría que haber asumido el reclamante. Y es que, si se obliga a que el empleador a haber realizado provisiones para atender los aportes pedidos, igual carga tendría que haber tenido el empleado, razón más que suficiente para que no se le imponga al primero aquello con lo que debe correr el segundo.

Argumento que ha sido respaldado entre otras, por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., pues si por la vía de la excepción de inconstitucionalidad, se inaplica para un caso en concreto el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, según el cual, solo existe la obligación de pagar el calculo actuarial respecto de aquellos trabajadores que prestaron su servicios en lugares sin cobertura del ISS y cuyos contratos de trabajo se encontraran vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100, mal podría el Juez de conocimiento aplicar el decreto 1748 de 1994 que reglamenta tal disposición, cuando se esta inaplicando la fuente de origen de la norma reglamentaria.

Siendo este el estado de cosas, el derecho a la pensión del tutelante no depende del giro de los aportes que tendría que haber provisionado el supuesto empleador, ya que no existe prueba de que el tutelante hubiese provisionado los de él.

Ausencia de perjuicio irremediable en cabeza del accionante

Conocido es que puede acudir al mecanismo excepcional de la acción de tutela cuando el accionante se encuentra ante una situación que tenga la posibilidad de ocasionarle un perjuicio irremediable, lo que en el presente caso no se encuentra probado.

La H. Corte Constitucional ha mostrado un especial interés en definir los lineamientos bajo los cuales se considera que nos encontramos ante la inminencia de un perjuicio irremediable y su revisión permite inferir que este no es uno de esos casos.

"En cuanto a la cualificación de los hechos que configuran la inminencia de un perjuicio irremediable, la jurisprudencia constitucional ha contemplado que ese perjuicio (i) debe ser inminente; (ii) debe requerir de medidas urgentes para ser conjurado; (iii) debe tratarse de un perjuicio grave; y (iv) solo puede ser evitado a partir de la implementación de acciones impostergables. El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder prontamente". Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética"

En el presente caso, brilla por su ausencia, prueba siquiera sumaria que permita inferir el supuesto estado de indefensión o el inminente perjuicio irremediable, concluyendo, por tanto, que la presente solicitud de amparo constituye exclusivamente un mecanismo para eludir o pretermitir el trámite legal correspondiente, ello es, el que debería surtir ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral, como Juez natural en este tipo de controversias.

CONSIDERACIONES:

COMPETENCIA:

Este Juzgado es competente para conocer de la acción de tutela con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1.991.

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN:

La acción de tutela se instituyó por el constituyente de 1991, en el artículo 86 de la Constitución Política, con la finalidad exclusiva de proteger de manera efectiva los derechos fundamentales de las personas cuando estos sean violados o puestos en peligro por acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, estos últimos, en los casos expresamente señalados por la ley.

Sin embargo, el acceso a este procedimiento preferente y sumario es procedente siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial que sea idóneo, apreciado en concreto, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por lo mismo, no es alternativo sino residual.

Según lo previsto en el numeral 2º del Decreto 306 de 1992 (reglamentario del Decreto 2591 de 1991), dicha acción protege exclusivamente los derechos constitucionales fundamentales, por ende, no puede emplearse, para hacer respetar derechos que sólo tengan rango legal, ni para hacer cumplir las leyes, los decretos, los reglamentos o cualquiera otra norma de rango inferior.

DEL CARÁCTER SUBSIDIARIO DE LA ACCIÓN DE TUTELA Y SUS REQUISITOS GENERALES DE PROCEDIBILIDAD.

Respeto a los requisitos de **subsidiariedad e inmediatez**, como exigencias generales de procedencia de la acción de tutela, ha sido tradicionalmente una condición necesaria para el conocimiento de fondo de las solicitudes de protección de derechos fundamentales, por vía excepcional. De hecho, de manera reiterada, la H. Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela conforme al artículo 86 de la Carta, es un mecanismo de protección de carácter residual y subsidiario, que puede ser utilizado ante la vulneración o amenaza de derechos fundamentales, cuando no exista otro medio idóneo para la protección de los derechos invocados, o cuando existiendo otros medios de defensa judiciales, se requiera acudir al amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.¹

Así, el agotamiento efectivo de los recursos y mecanismos ordinarios de defensa judicial, resulta ser no sólo un requerimiento de diligencia exigible a los ciudadanos frente a sus propios asuntos procesales, sino un requisito necesario para la procedencia de la acción de tutela como mecanismo de defensa, salvo que por razones extraordinarias no imputables a quien alega la vulneración, la persona se haya visto privada de la posibilidad de utilizar los mecanismos ordinarios de defensa, circunstancia que deberá ser debidamente acreditada en cada caso concreto.

Como puede verse, la acción de tutela no se constituye como una instancia adicional en los procesos judiciales contemplados por el ordenamiento jurídico para la definición y resolución de los conflictos legales, siempre y cuando los medios de defensa previstos

¹ Sobre la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio irremediable, resultan relevantes las sentencias C-1225 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; SU-1070 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño; SU-544 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-1670 de 2000 M.P. Carlos Gaviria Díaz, y la T-225 de 1993 en la cual se sentaron la primeras directrices sobre la materia, que han sido desarrolladas por la jurisprudencia posterior. También puede consultarse la sentencia T698 de 2004. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes y la sentencia T-827 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

en su interior mantengan el nivel de eficacia necesario para proteger los derechos fundamentales de las partes en litigio.

EL CASO EN CONCRETO

En razón al contenido y materia de la presente acción, es oportuno señalar que, dentro de las potestades del juez de tutela, se encuentra la de conceder el amparo inmediato siempre y cuando se encuentre probado el acaecimiento de un derecho constitucional fundamental, frente del cual el tutelante no tenga más medios judiciales idóneos para lograr dicho amparo.

Si bien la tutela procede como mecanismo transitorio, cuando se encuentra probado un perjuicio irremediable, ello no quiere decir que esta excluya las demás vías de amparo, pues si bien estas son o no demorados, deben ser propuestas debido a factores como competencia, naturaleza, etc. Además, al alegarse el presunto perjuicio irremediable dicho presupuesto debe ser probado con basto recaudo probatorio, no simplemente con razones de hecho.

El promotor de la acción constitucional señor **JOSE MANUEL VILLARREAL LEAL**, acude a la acción de tutela solicitando El pago inmediato del BONO PENSIONAL a través de la entidad denominada COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS.

Frente al caso particular, revisada la actuación es claro que el accionante cuenta con otros mecanismos judiciales para reclamar ante la jurisdicción ordinaria laboral sus derechos laborales y la pretensión aquí incoada, sin que en esta acción constitucional se hubiere demostrado que, a pesar de haber iniciado las acciones judiciales, dichos mecanismos no resultan idóneos para la protección de sus derechos fundamentales, pues no se demostró que el señor JOSE MANUEL VILLARRERAL LEAL ya haya iniciado ante el juez natural la reclamación de sus derechos laborales.

Aunado a lo anterior también se pudo evidenciar que, el aquí accionante a la fecha de este fallo, tampoco ha solicitado ante COLFONDOS el bono pensional que reclama para que, la entidad revise su caso y le de una respuesta de acuerdo con su historial laboral, es decir que el accionante no ha efectuado tramite alguno ni ante COLFONDOS ni ante la jurisdicción laboral.

Entonces, no puede entenderse la acción de tutela, como mecanismo subsidiario, o supletorio, máxime cuando existe una carga por parte del accionante como lo es la de acreditar los hechos constitutivos de la vulneración que pretende, cosa que acá no sucede por cuanto ni siquiera se ha adelantado ningún trámite ante COLFONDOS y mucho menos una demanda ante la jurisdicción laboral en procura de la reclamación del bono pensional en contra del supuesto empleador, aquí accionado, esto es, la FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. Téngase en cuenta que el juez Constitucional de tutela tiene un marco específico sobre el cual no puede extralimitarse, pues violaría derechos fundamentales como debido proceso, igualdad, etc.; de las demás partes.

Por lo anterior es claro que NO nos encontramos ante vulneración de derechos constitucionales alguno.

Por lo anterior, a juicio de este despacho la solicitud de amparo constitucional es improcedente y así se declarará, puesto que el accionante tiene otros mecanismos judiciales de defensa, siendo la vía ordinaria laboral el juez natural que debe conocer de estos asuntos y reclamaciones de reconocimiento de bono pensional.

En mérito de lo anteriormente expuesto, **EL JUZGADO NOVENO DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN EL NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,**

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción constitucional por las razones consignadas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: DESVINCULAR a COLFONDOS conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes intervinientes por el medio más expedito.
Secretaría proceda de conformidad.

CUARTO: REMITIR las diligencias a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada la sentencia dentro del término legal.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes. The signature is positioned above the printed name of the judge.

CESAR ENRIQUE OSORIO ORTIZ
JUEZ

AP.